

Bogotá, mayo 27 de 2024

Doctor

SALIM CARAM CAICEDO

JUEZ VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS

BOGOTA D.C.

E. S. D.

SENTENCIA TUTELA NRO. 2024-00118

PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA.

ACCIONANTE: YAIR LEANDRO RODRIGUEZ GIRALDO.

**ACCIONADOS: BANCO GNB SURAMERIS Y ASEGURADORA
SOLIDARIA DE COLOMBIA**

DIANA MARCELA IBARRA PARRA, de notas civiles conocidas, en mi calidad de apoderada del accionante **YAIR LEANDRO RODRIGUEZ GIRALDO**, encontrándome dentro de la oportunidad legal señalada por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes con la materia, muy respetuosamente impugno la decisión proferida por su respetable Despacho en el asunto de la referencia, la cual fue proferida el día 22 de mayo de 2024 y notificada a través de mi correo electrónico el día 24 de mayo de 2024.

I. ANTECEDENTES FÁCTICOS:

PRIMERO: Presenté acción de tutela, contra el Banco GNB Surameris y Aseguradora Solidaria de Colombia, por vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, a la vida digna y al de petición e información; y en consecuencia, se ordene al Banco GNB Surameris y Aseguradora Solidaria de Colombia, se haga efectiva la póliza de incapacidad total y permanente por invalidez con la cual estaba asegurado el crédito, con el fin de cubrir el valor insoluto de la deuda y de exonerarlo de esta obligación a partir del 7 de noviembre del año 2019 donde fue calificado por la Junta Médica del Ejército Nacional con pérdida de capacidad laboral del 59.59%.

SEGUNDO: Frente al amparo deprecado el despacho resuelve: “negar la acción de tutela descrita en el encabezamiento de esta providencia, dada la existencia de un hecho superado”, por ello el juzgado no realiza un análisis

de fondo a la vulneración, o no, de los derechos alegados, decisión que sustenta bajo los siguientes argumentos

II. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN:

PRIMERO: El despacho sostiene que en su numeral 7 que: “...Ahora bien, ya en el decurso de la acción de tutela, la demandada dio contestación a la petición genitiva de la queja constitucional, de la cual se envió respuesta mediante correo electrónico a la dirección dianamarcelaibarra1@hotmail.com, por lo que en este punto es importante señalar, que el derecho a obtener una respuesta no significa la favorabilidad a los intereses del peticionario, motivos suficientes para negar el amparo suplicado”

Esta togada no entiende como el Aqúo realiza esta afirmación toda vez que si bien es cierto el Banco Surameris GNB, realizó la contestación del derecho de petición en forma extemporánea y después de haber sido notificada de la acción de tutela, sin embargo el juez de conocimiento no observó en detenimiento todos los anexos allegados por la accionada y en los mismos no se aporta el pagaré solicitado al igual que no se contestó de fondo ni se allegó la documentación respectiva, descrita en el numeral primero del Derecho de petición elevado ante la entidad financiera con fecha 22 de marzo de 2024 que a la letra dice: “Se expida copias de los seguros todo riesgo a nombre de mi poderdante y las caratulas de los mismos que amparan la obligación con su banco del crédito de libranza No. 105938730, por cuanto la único que se conoce es la Póliza con vigencia 01/08/2019 – 30/09/2020 archivo 843-16- 994000000002-27, de la aseguradora Solidaria de Colombia, teniendo en cuenta que el mismo tenía vigencia hasta el 30 de septiembre del año 2020, deseo conocer el valor del seguro todo riesgo, su vigencia; cual es el número del seguro a la fecha; nombre de la empresa con quien se tomó dicho seguro, incluyendo la caratula del mismo; vigencia del seguro todo riesgo, indicando fecha de inicio y fecha de terminación”. Por tanto considero entonces que no se puede hablar de un hecho superado.

SEGUNDO: Respecto al amparo solicitado, frente a hacer efectiva la póliza de incapacidad total y permanente por invalidez con la cual estaba asegurado el crédito, con el fin de cubrir el valor insoluto de la deuda y de exonerarlo de esta obligación a partir del 7 de noviembre del año 2019 donde fue calificado por la Junta Médica del Ejército Nacional con pérdida de capacidad laboral del 59.59%; indica que: “En el asunto materia de juzgamiento, es palpable in radice que la intención del actor rebasa la finalidad de la figura en comento, pues lo que se pretende sumariamente es

que “se haga efectiva la póliza de incapacidad total y permanente por invalidez”, y lo cierto es que puede acudir a los mecanismos de defensa ordinarios para exponer tal pretensión, máxime cuando, el expediente no contiene evidencia demostrativa del compromiso alguno a los derechos fundamentales o la inminencia de la configuración de un perjuicio irremediable que justifique decisión en contrario, de lo que refulge la aplicación de la causal de improcedencia consagrada en el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991.

Si bien es cierto se cuenta con la vía ordinaria para obtener el pago del seguro por pérdida de capacidad laboral, también es cierto que es proceso puede durar años y a su vez con el dinero que se está cancelando al banco el mismo puede ser utilizado por mi prohijado para mejoras sus condiciones de vida, puesto que con el pago que se está generando a la entidad bancaria se está disminuyendo la capacidad económica de mi representado y afectando su mínimo vital y sus condiciones de vida digna, ya que este es un aspecto subjetivo y en todos los casos no podemos tomar los mismos presupuestos, puesto que las condiciones de vida de cada persona son individuales y lo que para una persona resulta suntuosa para otra puede ser algo necesario y vital para su subsistencia, lo que implica un perjuicio irremediable a continuar con su vida digna y mantener su vida en las condiciones que acostumbra a hacerlo.

Por otra parte el despacho de conocimiento desconoció la línea jurisprudencial respecto a estos casos resueltos de manera favorable por la Corte Constitucional en diferentes fallos de tutela ignorando el principio del derecho **UBI EADEM EST RATIO, EADEM EST O DEBET ESSE JURIS** **DISPOSITIO**: Principio del Derecho cuyo significado es que: donde hay la misma razón debe ser la misma la disposición del Derecho, desconociendo el Aqúo el derecho a la igualdad que también ha sido vulnerado por la entidad aseguradora al accionante por existen fallos en su contra por analogía en las sentencias: Sentencia T – 393 DE 2015, T-222 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), Sentencia T-832 de 2010, Sentencia T-830 de 2014, página 23, las cuales no se tuvieron en cuenta en el fallo de primera instancia y se encuentran en el fundamento de derecho, parte final.

Por tanto en el fallo de primera instancia, no se analizó la situación de mi defendido de manera integral, teniendo en cuenta que el Derecho a la información es un derecho fundamental y las peticiones se deben resolver de forma, claro, precisa y de fondo, así mismo el derecho a la vida digna, al mínimo vital todo esto en conexión con el derecho a la igualdad consagrado en las sentencias ya descritas en este documento.

III. PETICIÓN:

En consecuencia, solicito respetuosamente por parte de su Judicatura:

PRIMERO: REVOCAR la totalidad del fallo de tutela proferida por el **JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS**, proferido el día 22 de mayo de 2024 y notificado a través de mi correo electrónico el día 24 de mayo de 2024, y en su lugar se disponga tutelar los derechos fundamentales: al mínimo vital, al debido proceso, a la vida digna y al de petición e información e igualdad, en consecuencia se ordene a las entidades accionadas; **BANCO GNB SURAMERIS y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**, se haga efectiva la póliza de incapacidad total y permanente por invalidez con la cual estaba asegurado el crédito, con el fin de cubrir el valor insoluto de la deuda y de exonerarlo de esta obligación a partir del 7 de noviembre del año 2019 donde fue calificado por la Junta Médica del Ejército Nacional con pérdida de capacidad laboral del 59.59%. **SEGUNDO.** Se ordene en ese mismo sentido, se garantice los demás derechos vulnerados que su judicatura considere pertinente.

IV. NOTIFICACIÓN

Recibiré las notificaciones que el presente derecho pueda generar en la siguiente dirección:

La suscrita en la Calle 18 No. 23 - 39 Oficina 201 en San Juan de Pasto, correo electrónico: dianamarcelaibarra1@hotmail.com. Celular de contacto: 3163800428 y 3226403958

Mi poderdante señor Yair Leandro Rodríguez Giraldo, en la Carrera 79 D No. 35 - 90 Sur, urbanización Francisco José de Caldas, Barrio Kennedy, Bogotá, celular de contacto 3117009297, 3188342427, correo electrónico yairleandro11@gmail.com.

Se suscribe,



DIANA MARCELA IBARRA PARRA
DEFENSORA PUBLICA
C.C. 1085267899 DE PASTO
T.P. 206728 DEL C.S. DE LA J.

CORREO ELECTRONICO: dianamarcelaibarra1@hotmail.com

ⁱ <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-083-95.htm>) es el fundamento del derecho a la igualdad art 13 constitucional.